

San Bernardo, nueve de febrero de dos mil veinte.

VISTO Y OÍDO:

Que, se ha presentado ante este Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo doña **MARÍA PIA PONCE TABILO**, Técnico en Enfermería, domiciliada para estos efectos en Morandé N° 322, Oficina 407, Santiago; y entabla demanda por despido injustificado, recargo legal, nulidad del despido, indemnización por años de servicio, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales en contra de la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO**, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, representada legalmente por doña **NORA CUEVAS CONTRERAS**, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en O'Higgins N° 840, San Bernardo.

ANTECEDENTES DE LA DEMANDA:

Señala que con fecha 13 de marzo del año 2017, ingresó a prestar servicios personales como docente de aula, con especialidad en atención de enfermería, con autorización ministerial para ejercer la docencia y con contrato a plazo fijo para la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, en dependencias del Liceo Elvira Brady Maldonado, ubicado en calle Bulnes N° 902, San Bernardo. Este contrato fue renovado el año 2018 y luego en el año 2019, en este último período, aproximadamente en el mes de abril, comenzó con intensos dolores en su mano derecha lo que la llevó a acudir a un especialista médico, el que le diagnosticó Síndrome de Túnel Carpiano avanzado, por lo cual debía efectuarse una operación de manera urgente en ambas manos. La primera cirugía fue el 6 de junio y, posteriormente, el día 16 de septiembre 2019, con largas terapias de rehabilitación.

Agrega que cuando se enteró del diagnóstico conversó, personalmente, con la directora de ese entonces Sra. Brunilda Morales.

Hace presente que a fines del mes de marzo 2020, y en circunstancia que se encontraba haciendo uso de licencia médica, no recibió de parte de su empleadora el sueldo de manera íntegra, sino que solamente se pagó el monto correspondiente a trece días de ese mes. De inmediato efectuó un llamado telefónico a la nueva directora del establecimiento educacional Sra. Lucía Benavente, quien le informa, vía telefónica, que a partir del día 13 de marzo 2020, había sido desvinculada, aduciendo que el motivo era por sus continuas licencias médicas.

Manifiesta que jamás ha recibido una notificación de despido por parte de su ex empleadora.



Subraya que fue desvinculada por constantes licencias médica, y que al recibir la liquidación de sueldo aparece el pago de solo 13 días del mes de marzo de 2020.

Refiere que el 13 de abril de 2020, ingresó un reclamo por la página web de la Inspección del Trabajo, quien citó a comparendo de conciliación para el 11 de mayo de 2020, fecha esta última en que la parte reclamada se limitó a enviar una carta de aviso en que se señala que con fecha 29 de febrero de 2020, se puso término al contrato de trabajo, en virtud de la causal del artículo 72, letra d) del Estatuto Docente, “Término del período por el cual se efectuó el contrato”. En dicha misiva, también se señala el estado de sus cotizaciones de seguridad social.

Indica que su remuneración mensual, para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, ascendía a la suma de \$1.267.881 (un millón doscientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y un pesos).

Da cuenta que se encuentra afiliada a AFP CAPITAL y a FONASA, y que se le adeudan los períodos marzo de 2017 a marzo de 2020 para ambas instituciones de seguridad social, razón por la cual opera la nulidad del despido.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demandada y con el mérito de la misma se declare injustificado su despido, la nulidad del despido y se condene a la demandada al pago de lo siguiente:

1. Indemnización sustitutiva del aviso previo, según lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 162 del Código del Trabajo, equivalente a la suma de \$ 1.267.881.-
2. Indemnización por años de servicio por la suma de \$3.803.643, más el recargo del 50% de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 168, letra b) del Código del Trabajo, lo que corresponde a la suma de \$5.705.464.
3. Que se condene a la demandada al pago de la suma de \$15.214.572.- con concepto de remuneraciones que habría tenido que percibir hasta el mes de febrero del año 2021, en virtud de lo prescrito en el Artículo 87 del Estatuto de Profesionales de la Educación.
4. Pago de cotizaciones previsionales en AFP CAPITAL y de salud en FONASA.
5. Que se declare nulo el despido, en los términos señalados por el artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo.
6. Que se condene a la demandada expresamente a pagar los intereses, reajustes y las costas de la causa.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Encontrándose dentro de término legal, la demandada de autos contestó la demandada en los siguientes términos:



Por economía procesal nos remitimos a los hechos pacíficos decretados en audiencia preparatoria y que fueron reconocidos en la contestación, a saber:

1. Que, la parte demandante inició relación laboral con la demandada de autos el día 13 de marzo de 2017, ejerciendo la función de docente de aula, en virtud de diversos contratos a plazo fijo.
2. Que, para efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, la última remuneración de la parte demandante asciende a la suma de \$1.267.881 (un millón doscientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y un pesos).
3. Que la demandante firmo diversos finiquitos, excepto en lo que dice relación con el último contrato.
4. Que, la demandada comunicó a la actora que su contrato no sería renovado.

Sin embargo, niega y controvierte los demás hechos contenidos en la demanda, por cuanto la demandante fue contratada en virtud del artículo 25 de la Ley 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, indicando que la demandante detentaba la calidad de contratada, manteniendo una relación a plazo fijo, siendo su primera contratación la de fecha 13 de marzo 2017 con 30 horas cronológicas, relación que concluyó el 28 de febrero de 2018, suscribiendo el correspondiente finiquito ante ministro de fe y posteriormente renovado año a año, suscribiendo nuevos contratos de trabajos, los cuales fijaron nuevas condiciones y de la siguiente forma: 1 Lo subrayado es nuestro. - Desde el día 1 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019, con 30 horas cronológicas contrato a plazo fijo (CFT), suscribiendo el correspondiente finiquito ante ministro de fe. - Desde el día 1 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2020, con 44 horas cronológicas, distribuidas con las siguientes fuentes de financiamiento: contrato fijo de trabajo (CFT), 43 horas y PIE, 1 horas.

Da cuenta que han existido relaciones jurídicas diversas a plazo fijo, donde cada una de ellas terminó en el plazo estipulado entre las partes, razón por la cual opera la caducidad de la acción, atendido lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo.

Hace presente que los artículos 19 y 77, del Estatuto de los Profesionales de la Educación, rigen a los trabajadores que prestan servicios en la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, mientras que el artículo 87 solo rige para el sector particular y no para el municipal.

Agrega que, de acuerdo al artículo 25 del Estatuto de los Profesionales de la Educación, la demandante fue contratada en calidad de contratada, es decir, para empleos temporales, y no a través de un concurso público.



Subraya que el artículo 71 del Estatuto de los Profesionales de la Educación, establece que los docentes municipales se rigen por este Estatuto y supletoriamente por el Código del Trabajo, normas que no son aplicables en la especie, porque se trata de la relación laboral de una docente del sector municipal.

Asimismo, advierte que el artículo 72 del Estatuto de los Profesionales de la Educación, señala que los profesionales de la educación y que forman parte de la dotación docente del sector municipal, dejaran de pertenecer a ella solamente por las causales que indica, entre ellas, la letra d) por término del período por el cual se efectuó el contrato. Por tanto, es improcedente la pretensión de la actora, en orden a que su contrato sea calificado como de naturaleza indefinida, pues trasgrede las normas sobre cómo ganar un concurso público para adquirir la calidad de titular, intentando pasar a esta última calidad en perjuicio de otros docentes.

Alega que Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, remitió, el 27 de diciembre de 2019, al domicilio de la actora, una comunicación de fecha 12 de diciembre de 2019, informando que su contrato de trabajo concluía el 28 de febrero de 2020, de acuerdo al artículo 72 letra d) del Estatuto de los Profesionales de la Educación, es decir, “por término del período por el cual se efectuó el contrato”. Y, en cuanto a la la extensión del mismo hasta el 13 de marzo de 2020, ello dice relación con el hecho de haber recibido una licencia médica durante la vigencia de la relación laboral, la cual concluía ese mismo día; licencia que fue cursada en su oportunidad, de acuerdo a lo indicado en el artículo 38 del Estatuto Docente, que dispone que los profesionales de la educación tienen derecho a licencia médica con goce íntegro de sus remuneraciones. La norma legal señala expresamente que “Durante su vigencia el profesional de la educación continuará gozando del total de sus remuneraciones.” En la especie, la demandante tuvo una serie de licencias médicas por enfermedad común durante el año escolar 2019, todas las cuales fueron debidamente tramitadas por la Corporación, concluyendo la última el día 13 de marzo de 2020. Así, la Corporación tramitó esta última licencia médica y pagó en forma completa la remuneración de la actora por todo el período de vigencia de dicha licencia, circunstancia que en modo alguno puede servir de base para sustentar la transformación de un contrato a plazo fijo en indefinido, ya que, para ello, como se ha indicado, se requiere haber ganado un concurso público.

En lo relativo al pago de indemnizaciones por término de la relación laboral, el Estatuto de los Profesionales de la Educación contempla algunos casos, situación que no acontece en estos autos.



Expone que la indemnización por años de servicios, conforme al artículo 161 del Código del Trabajo no le es aplicable a la actora.

En lo que guarda relación con la nulidad del despido, indica que no es aplicable la ley Bustos al personal afecto al Estatuto de los Profesionales de la Educación que se desempeña en establecimientos educacionales administrados por Corporaciones Municipales.

Esgrime que las cotizaciones de seguridad social se encuentran íntegramente pagadas y así se le informó en la carta de desvinculación.

Previas citas legales, solicita tener por opuesta excepción de caducidad, y por contestada la demandada, y su rechazo, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se ha presentado ante este Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo doña **MARÍA PIA PONCE TABILO**; y entabla demanda por despido injustificado, recargo legal, nulidad del despido, indemnización por años de servicio, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales en contra de la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO**, representada legalmente por doña **NORA CUEVAS CONTRERAS**, conforme a los argumentos vertidos en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, en audiencia preparatoria, habiendo fracasado el llamado a conciliación, se fijaron los siguientes hechos:

HECHOS NO CONTROVERTIDOS:

5. Que, la parte demandante inició relación laboral con la demandada de autos el día 13 de marzo de 2017, ejerciendo la función de docente de aula, en virtud de diversos contratos a plazo fijo.
6. Que, para efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, la última remuneración de la parte demandante asciende a la suma de \$1.267.881 (un millón doscientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y un pesos).
7. Que la demandante firmo diversos finiquitos, excepto en lo que dice relación con el último contrato.
8. Que, la demandada comunicó a la actora que su contrato no sería renovado.

HECHOS A PROBAR:

1. Naturaleza jurídica del contrato que unió a las partes, y tenor de los finiquitos celebrados.



2. Procedencia de la causal invocada por la demandada para poner término al vínculo que la unía a la demandante y cumplimiento de los requisitos legales.
3. Estado de pago de las cotizaciones de seguridad social de la demandante.

PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE:

DOCUMENTAL:

1. Acta de Comparendo de Conciliación de Fecha 11-05-2019. **Se desestima, porque en nada aporta a la resolución del conflicto.**
2. Certificado de Cotizaciones Obligatorias FONASA, de fecha 19 de junio de 2020.
3. Certificado de Cotizaciones Previsionales AFP CAPITAL de fecha 08 de septiembre de 2020.
4. Liquidación de sueldo correspondiente a marzo de 2020.

ABSOLUCIÓN DE POSICIONES: Se citó, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, al Secretario General de la demandada, CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO o quien haga las veces de tal conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del Código del Trabajo, compareciendo don **HECTOR LUIS IRIBARREN VALDES, cédula nacional de identidad N° 6.637.710-5, Ingeniero en gestión pública.**

Tiene conocimiento de la naturaleza jurídica de los contratos que celebró la demandante.

Ella era una docente que prestaba servicios a plazo fijo, pero no sabe cuántas horas tenía asignada.

No tiene claridad respecto de si la cátedra que impartía la demandante se sigue impartiendo.

La carta dice que su contrato a plazo fijo tiene término y esa carta no recuerda de qué fecha es.

No sabe la fecha del envío de la carta de despido.

No puede asegurar que las cotizaciones de seguridad social se encuentren bien pagadas.

No sabe el contenido de la remuneración de la actora para el año 2020.

Dice haber hecho la comprobación que la demandante estaba habilitada para el ejercicio de la profesión.

No sabe si efectuaron los pagos correspondientes a AFP y FONASA de la demandante.



No conoce una licencia médica de abril de 2020 que aparece reportada por la Corporación.

Las cotizaciones de seguridad social corresponden a la unidad de remuneraciones.

No tiene conocimiento que la demandante haya recibido la carta de despido por de Correos de Chile.

No sabe por qué la demandante no firmó el finiquito.

Se desestima, porque se trata de un asunto de derecho, y el absolvente poco pudo responder para dar por acreditada alguna circunstancia excepcional, que no conste en la prueba documental y en la ley aplicable en la especie.

TESTIMONIAL: Fueron conducidos a estrados los siguientes testigos, quienes debidamente juramentados y legalmente examinados declararon al tenor de las preguntas formuladas por los intervinientes, a saber:

1. NATALIA FERNÁNDEZ CONTRERAS, CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD N° 18.747.982-7, ESTUDIANTE DE TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA.

Señala que cuando la demandante fue a dejar su licencia, le informaron que estaba despedida. Cree que esto fue a principios de marzo de 2020.

En el establecimiento educacional le dijeron que estaba despedida por las licencias.

No recuerda quién le dio esa información a la demandante.

La demandante era docente de tercero y cuarto de enfermería.

La demandante no recibió la notificación de despido en su domicilio.

CONTRAINTERROGADA: La demandante le consiguió el auto a su hermano para ir a ver por qué la habían despedida.

La testigo no estuvo en el momento del despido en el colegio.

Estuvo viviendo con la demandante en Gran Avenida y ella no recibió la carta.

2. JONATHAN ANTONIO FERNÁNDEZ CONTRERAS, RUN N°16.901.735-2, PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA.

Su esposa es la demandante de autos y está adelantando a la Corporación de San Bernardo por un despido injustificado.

En marzo de 2017 comenzó el contrato de la demandante.

No tiene claridad de cuántos contratos firmó ella, pero era uno por año.



Un día salieron del doctor, donde ella estaba en tratamiento, y él la acompañó a dejar la licencia. La esperó sentado en el auto, junto a su hija, y ella volvió llorando, porque había ido a dejar su licencia y se enteró que había sido despedida.

Ella le dijo que le habían extendido el contrato solo hasta el 14 de marzo y que le habían notificado su desvinculación, pero ella no recibió ninguna notificación, sino que se dio por enterada cuando fue aquel día al colegio.

Ella no recibió ninguna carta formal en su domicilio.

En marzo de 2020 fue la última remuneración que ella recibió.

Al tiempo del despido, la demandante se encontraba con licencia médica.

La demandante está enferma del túnel carpiano en ambas manos.

CONTRAINTERROGADO: Indica que acompañó a su esposa a la Corporación, pero se quedó afuera y no ingresó.

Cree que los hechos ocurrieron como lo dijo su señora, porque él cree en ella, pero no vio cuando se lo informaron.

Se le hizo un contrato fijo en tres oportunidades, porque estaba contratada anualmente.

La licencia de la demandante fue continua y él mismo las iba a dejar a la corporación o al colegio.

El sueldo se lo pagaba la Corporación directamente, porque había un convenio con la caja Los Andes.

No le rechazaron las licencias.

Se desestiman ambas declaraciones, por cuanto estamos ante un asunto de Derecho, en que los contratos y demás antecedentes dan cuenta de la naturaleza jurídica del mismo, como fue fijado el hecho a probar, y la nulidad del despido, si existiere, no se acredita con testigos, sino con certificados de las instituciones de seguridad social respectivas. Y en cuanto a la remuneración, también consta en documentos.

EXHIBICIÓN DOCUMENTAL: Se ordenó, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, exhibir los siguientes documentos:

1. Contrato de Trabajo y sus Anexos, de la trabajadora Sra. María Pía Ponce Tabilo, RUN N°17.315.818-1; de los años 2017, 2018 y 2019. No incorporó el **del año 2017.**
2. Liquidación de sueldo del mes de marzo de 2020.



No se hará efectivo el apercibimiento legal, en tanto es un hecho no controvertido la fecha de inicio y término de la relación laboral.

PRUEBA DE OFICIOS: Se ordenó oficiar a las siguientes instituciones:

1. AFP CAPITAL, ubicada en Bulnes 493, San Bernardo, Región Metropolitana, a fin de que informe sobre el monto y pago de cotizaciones respecto a la trabajadora Sra. María Pía Ponce Tabilo, RUN N°17.315.818-1, de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.
2. FONASA, ubicada en América 654, San Bernardo, Región Metropolitana, a fin de que informe sobre las cotizaciones de doña María Pía Ponce Tabilo, RUN N°17.315.818-1, pagadas durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA:

DOCUMENTAL

1. Copia de contratos de trabajo a plazo fijo de fecha 1 de marzo de 2018 y 1 de marzo de 2019.
2. Certificado de pago de cotizaciones previsionales.
3. Planilla de pago de cotizaciones del mes de agosto de 2017.
4. Certificado de licencias médicas.
5. Carta de despido de fecha 12 de diciembre de 2019.
6. Comprobante de envío de fecha 27 de diciembre de 2019.

ABSOLUCIÓN DE POSICIONES: Se citó, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, a la demandante, doña **María Pía Ponce Tabilo, cédula nacional de identidad N° 17315.818-1**, quien declaró lo siguiente:

El contrato de trabajo que ella firmó fue a plazo fijo, pero ingresó a la corporación en el año 2017.

Con anterioridad al contrato que se puso terminó y que da lugar a esta demanda, firmó otros contratos a plazo fijo.

Al término de esos contratos a plazo fijo, en dos ocasiones firmó el finiquito respectivo.

Tuvo dos contratos anteriores, y en uno solo firmó finiquito. En el primero firmó finiquito y en el segundo no firmó finiquito y en el tercero tampoco.

El contrato que firmó actualmente se regía por el Estatuto Docente.

Desconoce lo que señala el Estatuto Docente.

Sabía que el contrato terminaba el 29 de febrero de 2020.

Firmó 3 contratos con la demandada, marzo 2017, marzo 2018 y marzo 2019.



Por el tercer finiquito reclamó y por eso está acá, pero respecto del segundo no lo reclamó, porque no tuvo tiempo para ir a firmar el finiquito. Eso para ella era un papeleo.

No firmó el segundo finiquito y tampoco hizo reserva de acciones.

Era profesora titular.

No ganó ningún concurso, solo postuló a un cargo vacante.

En el año 2019 tuvo una licencia por lumbago y el 2020 no sabría decir qué cantidad de licencias tuvo, porque partieron a partir de mayo o finales de abril, por túnel carpiano.

No es efectivo que tuvo 11 licencias médicas en el año 2019 y en el 2020 no recuerda cuántas licencias tuvo.

Se le exhibe un documento relativo a licencia médica de la demandante, correspondiente al periodo que abarca desde el 30 de julio de 2018 hasta el 4 de abril de 2020. Este documento la fecha de inicio y la última fecha de término es 24 de abril de 2020 por 21 días. Son las licencias 2143330733, comienza la primera por 7 días el 30 de julio de 2018 hasta el 5 agosto de 2018 y la última de este listado es la 3289959 de 4 de abril de 2020 que finaliza el 24 de abril de 2020 por 21 días. Respecto de este documento, señala que no le rechazaron ninguna licencia, y en el 2020 alrededor de 3 fueron rechazadas y tres se encuentran impagas.

No sabe quién pagaba las licencias médicas, porque solo recibía el pago correspondiente a lo que debería ser su sueldo.

Su contrato de trabajo fue a contrata.

El 12 de diciembre de 2019 no recibió una carta en que se le señaló que a partir del 29 de febrero de 2020 se pondría término a su contrato de trabajo.

CUARTO: Que, en lo relativo a la excepción de caducidad, opuesta por la parte demandada, se funda en que la demandante firmó diversos contratos de plazo fijo, siendo su primera contratación el 13 de marzo de 2017, concluyendo el 28 de febrero de 2018; la segunda comenzó el 1 de marzo 2018 y terminó el 28 de febrero de 2019; y la última el 1 de marzo 2019 hasta el 28 febrero 2020.

Sostiene que ha operado la caducidad respecto de las relaciones laborales anteriores al 1 de marzo 2019, de acuerdo a lo previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo, que impide recurrir al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador.

QUINTO: Que, la demandante fue desvinculada en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 letra d) del Estatuto de los Profesionales de la Educación, Ley 19.070, el cual



solamente contempla un plazo de caducidad, en el artículo 75, en la hipótesis que el profesional de la educación reciba parcial o totalmente la indemnización a que se refieren los artículos 73 y 73 bis, en cuyo caso si estima que la municipalidad, o la corporación, no observó las condiciones y requisitos que señalen las causales de término de la relación laboral establecidas en la presente ley, incurre en una ilegalidad, y el trabajador podrá recurrir al tribunal competente dentro del plazo de sesenta días contados desde la notificación y solicitar la reincorporación en sus funciones.

El plazo de caducidad del artículo 75 no es aplicable a todas las causales de terminación de la relación laboral de los profesionales de la educación municipalizada, sino únicamente al caso hipotético planteado por el precepto indicado, cuyo no es el caso de la demandante.

Por consiguiente, se deberá rechazar la excepción promovida.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo del asunto: El 1 de marzo 2018, tal como consta en el contrato de trabajo incorporado por la parte demandada, las partes acordaron que la demandante se desempeñaría a partir del 1 de marzo de 2018 en el Liceo Elvira Brady Maldonado, como docente de enseñanza media, en aula, con 32 horas. En la cláusula sexta, el contrato señala que se inicia con fecha 1 de marzo 2018 y culmina el 28 de febrero de 2019.

Luego, el 1 de marzo 2019, se celebró un nuevo contrato de trabajo entre las partes, en virtud del cual la demandante se desempeñaría como docente de aula, de enseñanza media, en el liceo Elvira Brady Maldonado. En la cláusula sexta de este instrumento, se dejó constancia que la relación se iniciaba el 1 de marzo 2019 hasta el 29 febrero 2020.

Además, consta que la demandante firmó un finiquito, el 28 de febrero de 2018, en que se expresa que la demandante fue contratada como plazo fijo, a contar del 13 de marzo 2017 al 28 de febrero 2018, y que por término del periodo se puso fin al contrato de trabajo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Educación de 1997, otorgándose el más amplio y completo finiquito y que no tienen cargo alguno que formularse.

Que, en audiencia preparatoria se asentaron como hechos pacíficos que: Que, la parte demandante inició relación laboral con la demandada de autos el día 13 de marzo de 2017, ejerciendo la función de docente de aula, en virtud de diversos contratos a plazo fijo; que la demandante firmó diversos finiquitos, excepto en lo que dice relación con el



último contrato y que la demandada comunicó a la actora que su contrato no sería renovado.

SEPTIMO: Que, la Ley 19.070 regula las condiciones de trabajo para los profesores, tomando en consideración diversas clases. Así, el artículo 20, del párrafo I, en lo relativo al ámbito de aplicación, señala lo siguiente, en relación al ingreso a la carrera docente:

"Se entiende por dotación docente el número total de profesionales de la educación que sirven sus funciones de docencia, docencia directiva y técnico pedagógica, que requiere el funcionamiento de los establecimientos educacionales dependientes de un servicio local en su respectivo ámbito territorial, expresada en horas cronológicas de trabajo semanales"

Luego, el artículo 25 de la ley 19.070 establece la forma en que ingresan o se incorporan a una dotación los profesores, así como su calidad, en los siguientes términos:

"Los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados. Son titulares los profesionales de la educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes. Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o en reemplazo de titulares"

Por su parte el artículo 71 del Estatuto de los Profesionales de la Educación prescribe lo siguiente:

"Los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal se registrarán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias. El personal al cual se aplica este título no estará afectó a las normas sobre negociación colectiva"

Por su parte, el artículo 72 letra d) de la ley 19070 señala: **"Los profesionales de la educación que forman parte de la dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella... d) por término del período por el cual se efectúa el contrato"**.

OCTAVO: Que, conforme a la normativa legal transcrita, y de acuerdo a la prueba incorporada en juicio, el último contrato de la demandante, según da cuenta la cláusula sexta del instrumento, se inició el 1 de marzo de 2019 y tenía como fecha de término el 29 de febrero de 2020, salvo que concurriera alguna causa legal de terminación, lo que en la



especie aconteció, porque - efectivamente - se aplicó la letra d) del artículo 72 del Estatuto de los Profesionales de la Educación, Ley 19.070.

NOVENO: Que, de acuerdo a la prueba desahogada en juicio, es posible concluir que en el caso de marras no es aplicable el artículo 159 número 4 del Código del Trabajo, como lo pretende la parte demandante, pues como señala el artículo 20 del Estatuto Docente, el ingreso a la carrera docente importa el cumplimiento de determinados requisitos, dependiendo si estamos frente a un titular o a un contratado. De esta manera, el profesional de la educación que se incorpora a una dotación docente, en calidad de titular, debe efectuar una aplicación o postulación a un concurso público de antecedentes, el que, conforme al artículo 27 será convocado por el Departamento de Administración de la Educación o por la Corporación Educacional respectiva; en tanto que los profesionales de la educación contratados, serán designados mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio o un contrato de trabajo, caso este último de la demandante.

De acuerdo a lo anterior, la demandante no tenía la calidad de titular, por cuanto no aplicó a un concurso público para ocupar el cargo en calidad de titular, y no puede pretender, fundada en reiterados contratos a plazo fijo en calidad de contratada, puedan constituir una especie de convalidación y devenir en un contrato en calidad de titular, ya que la ley 19.070 es la que determina las formalidades y requisitos que se deben cumplir para que un profesional de la educación sea incorporado a una dotación, de manera que no se puede, por la vía jurisdiccional, generar un precedente que importe que los maestros que son contratados por un tiempo determinado, por el solo transcurso del tiempo, adquieran la calidad de titulares en desmedro de otros profesionales de la educación que aplican a un concurso, que se preparan, que profundizan en sus estudios y que, en definitiva, siguen el conductor regular establecido por la ley para formar parte de una dotación docente, pues finalmente lo que busca el legislador es que las personas que ingresen a prestar servicios en los colegios públicos, lo hagan por la vía del concurso público de antecedentes, a objeto que se conviertan en titulares aquellos que cuenten con las mejores herramientas para enfrentar una carrera docente en beneficio de los educandos.

La Excelentísima Corte Suprema, en fallo de fecha 4 de marzo de 2019, en los autos Rol 1410/2018, ha establecido que el estatuto de los profesionales de la educación es una norma de carácter especial que regula la modalidad de los contratos, y que el Código del Trabajo solamente se debe aplicarse de manera supletoria, vale decir, que el Estatuto de los Profesionales de la Educación goza de preferencia en su aplicación en lo



que respecta a los profesionales de la dotación docente municipal, excluyendo el imperio del derecho laboral común en esos asuntos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 del mismo cuerpo legal, en relación con el artículo 1° del estatuto laboral, toda vez que la norma especial reglamenta la figura de la contrata en su integridad, dándose aplicación al principio de la especialidad.

El máximo tribunal señala, respecto de los profesionales de la educación que se encuentren vinculados a una municipalidad en calidad de contratados, y que sus contratos se renueven sucesivamente por varios años y sus servicios terminen por el vencimiento del plazo estipulado, no resulta procedente considerar que tal vínculo ha derivado en uno de carácter indefinido, así como tampoco que proceda el pago de las indemnizaciones sustitutivas de aviso previo y por años de servicio -, porque tal desvinculación opera de pleno Derecho.

De acuerdo a los argumentos vertidos por la Corte Suprema, y considerando que la desvinculación opera de pleno derecho, es posible sostener que ni siquiera era necesario que la demandada remitiera carta de desvinculación a la actora, la que – a diferencia de lo que sostuvieron sus testigos – le fue remitida, según da cuenta el *Boucher* de Correos de Chile, de fecha 27 de diciembre de 2019, en que consta que la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, dio aviso a la demandante que su contrato de trabajo expiraba el día 29 de febrero de 2020, como consta en la carta que se incorporó en estos autos. En el comprobante de correo se indica que la destinataria era doña María Pía Ponce Tabilo, es decir, la actora. Y el domicilio era Eleuterio Ramírez N° 9853, El Bosque, Santiago, vale decir, el mismo que aparece en el contrato de fecha 1 de marzo de 2019, siendo carga de la demandante informar a su empleador cualquier cambio del mismo.

A mayor abundamiento, la omisión de los requisitos del despido, cosa que no acontece en autos, por cuanto la carta fue remitida, no invalida el despido y solo da lugar a una sanción de orden administrativo. Y, además, la actora sabía perfectamente, desde la fecha en que firmó el contrato de trabajo, que el mismo culminaría el 29 de febrero de 2020, no requiriendo la remisión de misiva alguna.

El hecho que la actora estuviere gozando de licencia médica hasta el 13 d marzo de 2020, tampoco importa que el contrato de plazo fijo haya devenido en uno de naturaleza indefinida, y que su función de contrata desembocara en la titularidad, ya que ello, tal como se ha sostenido en este fallo, no procede. Y, el pago que hizo la demandada, en lo relativo a los 13 días del mes de marzo de 2020 solo dan cuenta del



cumplimiento del artículo 38 del Estatuto de los Profesionales de la Educación, el que señala: ***“Tendrán derecho a licencia médica, entendida ésta como el derecho que tiene el profesional de la educación de ausentarse o de reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de la salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia el profesional de la educación continuará gozando del total de sus remuneraciones...”***.

Por último, en la carta que informa que el contrato termina el 29 de febrero de 2020, se indica que se está evaluando la posibilidad de contar con los servicios de la demandante para el año 2020, lo cual se resolverá en el mes de enero del mismo año, pero ello no constituye una oferta irrevocable del empleador, sino que solamente es una mera expectativa, la que no se concretó finalmente, pero que no obliga a la demandada a cumplir, porque, finalmente, no se optó por mantenerla.

En mérito de lo razonado precedentemente, la demanda de autos no podrá prosperar.

DECIMO: Que, en lo referente a la nulidad del despido, y siguiendo el hilo de las conclusiones a que se ha arribado en los apartados que anteceden, no siendo aplicable el Código del Trabajo, por cuanto éste es solo aplicable de manera supletoria, malamente procedería la sanción del artículo 162 inciso 5° y siguientes del mismo cuerpo legal.

UNDECIMO: Que, la prueba de autos ha sido valorada conforme a las reglas de la sana crítica, respetándose los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, desestimándose aquella a que se hace alusión en el motivo 3° de este fallo.

DUODECIMO: Que, no se condena en costas a la perdidosa por estimarse que ha tenido fundamento plausible para litigar.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto los artículos 1, 2, 5, 7, 9, 420, 425, 453, 454, 457, 459, y demás pertinentes del código del trabajo; y artículos 1° y demás atingentes de la Ley 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, **SE RESUELVE:**

- I. Que, **se rechaza la excepción de caducidad** opuesta por la parte demandada.
- II. Que, **se rechaza en todas sus partes**, la demanda interpuesta por doña **María Pía Ponce Tabilo** en contra de la **Corporación Municipal de Educación y**



Salud de San Bernardo, representada por doña **Nora Cuevas Contreras**,
declarándose que la desvinculación de fecha 29 de febrero de 2020 se ajusta a
Derecho

III. Que, cada parte asumirá sus costas.

Regístrese y archívese.

Notifíquese a las partes por correo electrónico.

RIT: O-395-2020.-

RUC: 20-4-0279391-1.-

**Dictada por don Arturo Orlando Briceño Rivera, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de San Bernardo.**

